

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo, por Victor Perez, Ignacio Cordero y Encarnacion Anaya, contra el Cefe político de Atotonilco el Grande, que habiéndoles juzgado como salteadores conforme á la ley de 2 de Mayo de 1873, los sentenció á la pena capital.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor que suscribe, alegando de bien probado en el juicio de amparo promovido por Victor Perez, Ignacio Cordero y Encarnacion Anaya, contra el C. Cefe político de Atotonilco el Grande que los procesó y sentenció á la pena capital considerándolos como salteadores, con cuyos procedimientos en concepto de los quejosos se violan en sus personas varias garantías que la Constitucion federal otorga y con especialidad la del artículo 13, dice: que examinadas las constancias de autos y con particularidad el proceso que en copia aunque incompleta, remitió la autoridad responsable, contra el cual han reclamado los quejosos y al que se han referido para justificar los puntos de su petición, resulta que aquella autoridad considerando en su sentencia como bien probado el hecho de que Perez, Cordero y Anaya con Manuel Picazo, robaron en la madrugada del día 28 de Setiembre último á unos transeuntes llamados Guadalupe Arellano y Abundio Avila, en el portal de la casa del C. Jesús Arcaga situada en la calle principal del pueblo de Omitlan donde pernoctaron, y considerando tambien á los mismos promoventes como una gavilla de malhechores, los sentenció en efecto á la pena capital comprendiéndolos en la ley federal de 2 de Mayo de 1873, sobre salteadores y plagiarios, por la que, como es sabido se suspendieron solo para estos crimi-

nales, las garantías individuales que se mencionan en su artículo 1º.

Los quejosos han negado estar comprendidos en esta ley, tanto porque sin pruebas se les condena, cuanto porque no ha debido considerárseles como gavilla de salteadores en el sentido de la misma ley.

A la simple lectura de las diligencias que en la causa se practicaron, se advierte en efecto, la ausencia de toda prueba clara y segura como en derecho se requiere, por la que se pueda tener por cierto que los mencionados individuos Perez, Cordero y Anaya, hayan sido los autores del robo que se les atribuye, porque ninguna prueba directa propiamente tal, se encuentra, y ningun testigo idóneo y presencial del hecho, declaró en la causa; y la prueba indirecta ó de indicios en que la sentencia descansa, es tan mala, que ni prueba merece llamarse, por que los que se reputan indicios carecen absolutamente del enlace y conexión en que consiste la fuerza de esta prueba circunstancial, segun las doctrinas de los autores que de la materia tratan.

Para demostrar la exactitud de estos conceptos, no parece necesario detenerse en un minucioso examen de todos y cada uno de los datos que se tuvieron en cuenta por la autoridad que sentenció á los quejosos, por que desde luego se descubre el vicio de la argumentacion que se usa y por la que se pretende inferir el hecho de que dichos individuos fueron los autores del robo, de circunstancias vagas ó inconducentes como es la de haber andado en la calle en la noche del suceso, y algunas horas antes de que este tuviera lugar, y como son las demas menos justificadas y menos importantes; así pues, falta la prueba jurídica que la ley de 2 de Mayo de 1873 no excluye, como se vé en su artículo 3º, y conforme á ella no han debido ser condenados los promoventes, ni privados por lo mismo, de las garantías que la Constitucion les otorga.

Además de esta consideracion que ha bastado en casos análogos para fundar el

amparo (Semanario Judicial tomo IV página 327), en el presente existen otras que no carecen de fuerza y que hacen mas patente el concepto de que á los individuos de que aquí se trata, no ha podido aplicárseles la citada ley de salteadores y plagiarios, por que aun suponiendo que estuviese bien probado que ellos reunidos hubieran robado á los dos hombres que dormian en el portal de la casa Arcega, atentas las circunstancias de Perez, Cordero y Anaya, el modo con que se supone que se perpetró el robo en cuestion y que no está probado que si quiera estuvieran armados estos supuestos asaltantes, ni es posible admitir que formaran una gavilla y que ejecutaran un asalto en la acepcion jurídica de estas palabras, y menos en el sentido de la ley que se les há aplicado, por que al declararse en su artículo 8º que se entienden tambien salteadores "los que en gavilla atacaren en poblado con objeto de robar, herir ó matar á los habitantes," facilmente se entiende que se refiere y comprende á las reuniones de foragidos que se han hecho tristemente célebres en el país, y que organizadas en partidas mas ó menos numerosas, atacan y pueden atacar en una poblacion, cosa que el buen sentido no permite que se aplique á los individuos Perez, Cordero y Anaya.

Por otra parte, la necesidad de restringir la ley conforme á los mas sanos principios de interpretacion, á los supremos males que con ella se propuso remediar el legislador, es tanto mas importante cuanto que segun los principios en la misma Constitucion consignados, no sería llana la aplicacion de la ley escepcional de que se trata, ni á los verdaderos salteadores en poblado, por cuanto el artículo 23 de la Constitucion no reservó la pena de muerte á toda clase de salteadores ó si quiera al salteador en general, sino expresamente al salteador de caminos, y ya se vé por esto que no carece de gravedad condenar á muerte á otro salteador que no sea de caminos, y esto á pesar de la ley citada, por que no puede prevalecer contra

la Constitucion que es la ley de las leyes, y á pesar de la suspension de garantías, por que no puede tener lugar sino con los requisitos que la misma Constitucion prescribe y con escepcion de las garantías que aseguran la vida del hombre, segun el artículo 29.

Por todo lo expuesto, al suscrito parece fundada la procedencia del amparo que han solicitado los individuos expresados, Victor Perez, Ignacio Cordero y Encarnacion Anaya, y en consecuencia, pide al Juzgado se sirva otorgarlo por la violacion de las garantías designadas, quedando les quejosos á disposicion de su Juez competente segun lo pidieron tambien en su respectivo ocurso.

Pachuca, 28 de Enero de 1874.—*I. Durán.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Pachuca, Enero 30 de 1874. Visto este juicio de amparo promovido por los CC. Víctor Perez, Ignacio Cordero y Encarnacion Anaya, contra los procedimientos del C. Gefe político de Atotonilco, en virtud de los cuales fueron juzgados, con violacion de varias garantías constitucionales y especialmente la del artículo 13 del Código federal, con arreglo á la ley de 2 de Mayo de 1873 sobre salteadores, y condenados á la pena capital, por imputárseles haber asaltado la madrugada del 17 de Setiembre último á dos transeuntes que dormian en el portal de una casa situada en el centro de la calle principal de Omitlan, robándoles en dinero y varios objetos cosa de 25 pesos, ó hiriendo aunque levemente, al parecer, á uno de ellos. Visto el informe de la autoridad responsable; la copia incompleta que remitió de la causa instruida contra los quejosos; el pedimento fiscal apoyando la concesion del amparo; la citacion para sentencia y cuanto de autos consta y Considerando:

Primero: Que de las diligencias que practicó el Gefe político, no consta cuan-

to en derecho se necesita, para probar que los quejosos fueron los autores del robo de que se trata, pues solo existen contra ellos algunos indicios que por ligeros, apenas pueden fundar una sospecha pero jamás constituir una prueba semiplena.

Segundo. Que aun dando por evidente la participacion de Perez y socios en el mencionado delito, no pueden considerarse comprendidos en la citada ley de 2 de Mayo, porque ni el robo se cometió en despoblado, ni aquellos formaban gavilla de la que pudiera decirse con el artículo 8º de la propia ley, que atacaron la poblacion de Omitlan para robar, herir ó matar á los habitantes supuesto que vivian pacíficos en el mismo pueblo, y solo parece haberse reunido algunas horas antes del suceso, para pasear y tomar pulque y demas licores.

Tercero. Que condenar á alguno por cualquier delito sin pruebas bastantes de haberlo cometido, es violar la garantía consignada en el artículo 16 de la Constitucion que no está suspensa, pues nadie puede ser molestado en su persona ó intereses sin causa legal fundada y motivada, y

Cuarto. Que aplicar la ley de 2 de Mayo tantas veces citada, á los robos verificados en poblado, no siendo por alguna de tantas partidas de malhechores que atacan á las poblaciones, es violar la garantía de la segunda parte del artículo 14, que tampoco está suspensa, porque las leyes deben ser exactamente aplicadas al hecho de que se trata, y no es por lo mismo constitucional la práctica observada por el Gefe político de Atotonilco, de aplicar la referida ley de salteadores al caso presente por *mayoría de razon*, como dice en uno de los considerandos de su sentencia; de conformidad con las prescripciones de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: que la Justicia de la Union ampara y protege á Víctor Perez, Ignacio Cordero y Encarnacion Anaya, contra el C. Gefe político de Atotonilco, por haberlos juzgado y sentenciado con arreglo á la ley de 2 de Mayo de 1873,

porque con tales procedimientos y providencias, se violan las garantías individuales que otorga el Código fundamental en sus artículos 14 segunda parte y 16, siendo el efecto de esta sentencia el que los quejosos sean consignados al Juez ordinario correspondiente. Hágase saber; compúlsense las copias respectivas para el «Semanario Judicial» y «Diario Oficial» y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales. Así sentenció y firmó el C. Lic. Miguel Mejía, Juez de Distrito del Estado de Hidalgo. —Doy fé.—*M. Mejía—Francisco Briseño.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Marzo 17 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo por Víctor Perez, Ignacio Cordero y Encarnacion Anaya, contra el Gefe político de Atotonilco el Grande, que habiéndoles juzgado como salteadores conforme á la ley de 2 de Mayo de 1873, los sentenció á la pena capital; visto el informe de la autoridad responsable, con las constancias de la causa instruida á los quejosos, el parecer fiscal; el fallo del inferior, y

Considerando: que la calificación de la competencia de las autoridades para aplicar la ley de 2 de Mayo de 1873, solo puede derivarse de un exámen de los hechos, que demuestre claramente la responsabilidad de los acusados de asalto ó plagio.

Que en el caso presente no puede existir esa demostracion clara, por que las pruebas que han sido consideradas suficientes para motivar la pena impuesta á los solicitantes, no pasan de indicios mas ó menos fuertes.

Que en consecuencia han sido violadas las garantías consignadas en los artículos 14, segunda parte, y 16 parte primera de la Constitucion federal.

Con fundamento de los artículos 101 y

102 de la misma, se declara: que, es de confirmarse y se confirma en todas sus partes la sentencia del Juez de Distrito del Estado de Hidalgo que concedió el amparo á Victor Perez, Ignacio Cordero y Encarnacion Anaya, dejándolos á la disposicion de los Jueces comunes á quienes serán consignados desde luego.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia; publíquese archivándose á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Iglesias.*—*Garza.*—*Lozano.*—*Arteaga.*—*Ordáz.*—*Ramirez.*—*Castañeda.*—*Altamirano.*—*Guzman.*—*Velasquez.*—*Zavala.*—*F. Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, 20 de Abril de 1874.—*Lic. Emilio Ordáz*, oficial mayor.

## CRIMINAL.

*Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Hidalgo, contra Pedro Moctezuma y socios, por infraccion de la ley electoral.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El Promotor fiscal dice: que examinadas estas diligencias practicadas contra los CC. Pedro F. Moctezuma, José María Rea, Marcos Godines, Vicente Orduña y Nicanor Lucio, consignados á este Juzgado de Distrito por el C. Gefe político de Tula por considerarlos delincuentes como infractores de la ley de 8 de Mayo de 1871 en su artículo 29 fraccion IV, en virtud de haber funcionado como mesa de una seccion electoral, sin haberse instalado bajo la intervencion y presidencia del comisionado instalador nombrado, resulta: que el hecho es enteramente

cierto y está suficientemente comprobado, así como el de que el mencionado instalador no se presentó sino despues de la hora señalada por la ley de la materia y para instalar otra mesa en la misma seccion; pero como ni por la ley que se considera infringida, ni por otra, se señala pena á los que se hallan en el caso de los acusados, tanto por esta circunstancia cuanto por la de haberse derogado recientemente la ley de 8 de Mayo de 1871, no hay mérito para continuar este proceso y esto aunque por la ley derogada hubieran sido punibles los hechos de que se trata, conforme al artículo 132 fraccion IV del Código penal.

En las diligencias sin embargo, constan algunas providencias dictadas por el Gefe político contra los acusados, cuyas constancias convendrá tener á la vista en la causa que se instruye al mismo Gefe político por abusos cometidos en las propias elecciones, pues no puede negarse la relacion que estos actos tienen con aquellos sujetos aun á la accion de la justicia, por haberse revocado por la superioridad, el auto de sobreseimiento pronunciado por este Juzgado en la indicada causa.

Por tales consideraciones, el Promotor que suscribe, concluye pidiendo, primero: que se sobresea en la presente causa; segundo: que se compulse testimonio de las diligencias y documentos de este proceso, en que constan los procedimientos del C. Gefe político de Tula usados contra los acusados, para agregarlo á la causa que á esa autoridad se sigue.

Pachuca, 26 de Noviembre de 1873.—*J. Durán.*

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Pachuca, 12 de Diciembre de 1873.—Vistas estas diligencias practicadas contra los CC. Pedro F. Moctezuma, José María Rea, Marcos Godines, Vicente Orduña y Nicanor Lucio, por fraudes cometidos en las